



**OSAL**

**Observatorio Social de América Latina**  
**Publicación electrónica**

# **Informe de Coyuntura**

**A**

**M**

**Consejo Latinoamericano  
de Ciencias Sociales**



**CLACSO**

**Conselho Latino-americano  
de Ciências Sociais**

# Documento de trabajo N° 48

*Realizada por  
el Comité de Seguimiento  
del Conflicto Social y la Coyuntura  
Latinoamericana de A*



Coordinación

María Celia Cotarelo

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de reseñas bibliográficas cuatrimestrales en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los resultados de este trabajo de registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un registro de la producción bibliográfica realizada durante el período indicado en uno de los 19 países relevados.

La Reseña Bibliográfica presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos **Comités de Seguimiento del Conflicto Social** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

### Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS	INSTITUCION	RESPONSABLES
Guatemala	FLACSO	Simona Yagenova Mario Castañeda
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Diana Cárdenas
Paraguay	Centro de Documentación de Estudios	Quintín Riquelme
Ecuador	CIUDAD	Mario Unda Hugo González
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Chile	ARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo
Brasil	LPP	Roberto Leher
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
México	UNAM	Massimo Modonesi Lucio Oliver
Panamá, El Salvador, Nicaragua Honduras y Costa Rica	CELA (Panamá)	Marco A. Gandásegui, h.
República Dominicana y Puerto Rico	Centro Juan Montalvo (Rep. Dominicana)	Mario Serrano Juan Luis Corporán
Venezuela	PROVEA	Marino Alvarado Marco Antonio Ponce
Costa Rica	IIS	Sindy Mora Solano

# **Costa Rica**

## **Informe de coyuntura**

### **Noviembre - diciembre de 2008**

Sindy Mora Solano, Anthony García Marín  
y Alejandro Alvarado Alcázar.

Durante los meses de setiembre y octubre se registran un total de 33 acciones colectivas de protesta social en Costa Rica. Al igual que en meses anteriores, en este periodo, las acciones estuvieron protagonizadas por los trabajadores, las organizaciones ambientalistas, y actores sociales vinculados a distintos sectores productivos, como los empresarios, los productores agrícolas y los pescadores. También protagonizaron el conflicto los grupos de vecinos de distintas localidades y grupos de mujeres, en el día Internacional de la No violencia contra las Mujeres.

Los principales conflictos presentados durante el bimestre noviembre/diciembre de 2008 se clasifican de la siguiente forma:

1. Conflictos laborales
2. Conflictos ambientales
3. Conflictos productivos
4. Conflictos por el TLC
5. Conflictos vecinales
6. Conflictos de género

#### **1. Conflictos laborales**

Tal y como se ha reseñado para los balances de coyuntura anteriores al presente, los conflictos laborales son un eje central en las acciones colectivas de protesta del país. Para el periodo noviembre-diciembre se dan diversas acciones de este tipo, protagonizadas por trabajadores que demandan indemnizaciones, reajustes salariales, mejores condiciones laborales y acciones concretas para enfrentar las tendencias hacia la flexibilidad laboral.

Es importante señalar que las iniciativas de flexibilización laboral, que se discuten en el país desde hace varios años, se han intensificado el debate, aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC). El mes de noviembre inicia con la organización del “Primer Foro de Flexibilización Laboral y Libertad Sindical en Costa Rica”, organizado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). En este foro diversos representantes de organizaciones sociales, de instituciones públicas y de entidades internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) discuten las medidas que promueven la flexibilidad laboral, en términos de las implicaciones para el trabajo decente que estas medidas puedan conllevar.

Las mejoras en las condiciones laborales son solicitadas por el Sindicato de Técnicos y Asistentes Administrativos de Farmacia (SINTAF) y el personal técnico y profesional de la Clínica Marcial Rodríguez. Funcionarios de estas instituciones denuncian en diversas ocasiones durante este bimestre el serio problema de recargo laboral que

enfrentan, por la excesiva cantidad de recetas que se despachan diariamente y por la falta de personal técnico y farmacéuticos para cumplir con el despacho de recetas. De la misma forma, estos funcionarios han solicitado mejoras en el salario recibido por su trabajo.

Como parte de las tendencias a la apertura en distintas instituciones monopolizadas por el Estado costarricense, son los muelleros de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) quienes solicitan al gobierno una indemnización de ¢280 millones (unos \$500 mil) para cada trabajador, a cambio de la concesión de los puertos de Moín y Limón, en la provincia de Limón.

Por su parte, un grupo de taxistas, afiliados a la ANEP, realiza una declaración pública en la cual indican que demandarán al Estado y pedirán que los indemnice por la falta de acciones contra el servicio ilegal de transporte. De acuerdo a estos taxistas, el Estado incumple el contrato de concesión al ser cómplice de la competencia desleal con los “piratas”, nombre con el que se conoce a los taxistas informales que prestan el servicio de transporte en el país. Relacionado con este conflicto por los permisos del servicio de transporte, más de 200 porteadores que prestan dicho servicio puerta a puerta, conocidos como porteadores, realizan una manifestación frente a la Municipalidad de San Ramón, en la provincia de Alajuela. Esta protesta se da por el cierre de los parqueos privados donde operaban cinco empresas de porteo. Los porteadores demandan que se les permita seguir operando como lo venían haciendo. Días después, la Federación Nacional de Cooperativas de Taxis (FENACOTAXI) realiza una declaración pública en la que se pronuncian en contra de otorgar nuevos permisos de operación temporal que reclaman algunos ex adjudicatorios de permisos. Estos permisos se otorgarían con la aprobación de la nueva Ley de Tránsito, de acuerdo con lo propuesto por algunos de los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Finalmente, los trabajadores de la Municipalidad de Alajuela, en la provincia de Alajuela, realizan un paro de labores como medida de presión para que se les realice un reajuste salarial y se haga una modificación al reglamento interno de trabajo. La modificación al reglamento se solicita en lo referente a accidentes laborales, dado que aunque los trabajadores cuenten con póliza de seguros, en caso de sufrir un accidente laboral deben pagar el deducible por dicho concepto.

## **2. Conflictos ambientales**

La oposición a la minería a cielo abierto y las luchas por la defensa del agua son los principales conflictos que convocan a distintos actores a pronunciarse por la combinación entre las políticas públicas y las acciones privadas de apropiación de los recursos naturales.

Sobre la minería a cielo abierto, tanto el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) como el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) hacen público su pronunciamiento en relación a los permisos para desarrollar un proyecto minero en Las Crucitas, en la zona norte del país. Este proyecto minero, que fue autorizado mediante un decreto ejecutivo firmado por el jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles, y el Presidente de la República, Óscar Arias, levanta polémica debido a los eventuales daños ambientales y perjuicios en la salud de las comunidades cercanas, que puedan ocasionarse con la actividad minera a cielo abierto. Estas entidades universitarias demandan al presidente de la República la derogación inmediata del decreto ejecutivo y

cuestionan los beneficios que podrá tener la minería, en función de los impactos ecológicos y económicos para las comunidades cercanas. También se solicita que se restablezca la moratoria en materia de metales, existente anteriormente, y que regulaba la actividad minera.

Días después, varias agrupaciones afiliadas al Frente de Oposición a la Minería de Oro, entre ellas colegiales y fuerzas vivas, realizan una marcha por las principales calles de Ciudad Quesada, San Carlos en la provincia de Alajuela, para exigir la cancelación definitiva de la concesión dada por el Gobierno a la empresa Vanessa Ventures y su filial costarricense Industrias Infinito S.A., para la explotación minera en Las Crucitas, Cutris de San Carlos. Por su parte, la fundación ambiental creada por el presidente Óscar Arias para promover políticas acordes con la naturaleza recomienda al mandatario prohibir la minería a cielo abierto, como la del proyecto Las Crucitas. Este grupo insta a declarar una moratoria a la minería metálica a cielo abierto, hasta tanto se revise y actualice el Código de Minería.

En lo que respecta al conflicto por el agua, los representantes del MINAET, Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), presentan en la comunidad de Sardinal el documento “Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal”. En este encuentro, los representantes gubernamentales señalan que los mantos acuíferos de Sardinal se encuentran fuera de riesgo, a pesar del desarrollo turístico en la zona. Los vecinos de la comunidad rechazan el informe presentado por el gobierno, y solicitan la realización de un nuevo estudio sobre las condiciones hídricas de la zona. Por su parte, los desarrolladores de los proyectos turísticos movilizan a una serie de trabajadores de la construcción, en su mayoría nicaragüenses, a fin de apoyar el desarrollo inmobiliario en la zona. Ante esta estrategia de movilización, los vecinos de Sardinal impiden la entrada de los trabajadores de la construcción en el encuentro con los representantes gubernamentales.

### **3. Conflictos productivos**

Los conflictos productivos de este bimestre son protagonizados por los empresarios, organizaciones campesinas, y pescadores artesanales.

Los empresarios organizados en la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) realiza una declaración pública en la que exige al gobierno participación en la elaboración de planes de requisitos, análisis de las ofertas y carteles de licitación; en el proceso de concesión de los puertos de Moín y Limón en la provincia de Limón, sobre el que anteriormente se hizo referencia a su proceso de apertura. Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) presenta una demanda contra el Instituto Nacional de Seguros (INS) ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que se declare nulo el incremento del 10%, únicamente a las empresas privadas en la póliza de riesgos del trabajo.

Las organizaciones campesinas -entre las que destacan UPANACIONAL, COOPEAGRI, COOPEATIRRO, Coopecañera de San Ramón, la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano (ANAPROBAN), la Cámara Nacional de Productores Genéricos (CONAPROGE), los Productores de Arroz, la Unión de Productores Agropecuarios Independientes de Pérez Zeledón (UPIAV), la Cámara de Productores de Caña del Atlántico, AGRATIIRRO y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG)-, realizan una declaración pública en la que

señalan que no permitirán que se haga ningún cambio al proyecto de ley que agilizaría el registro de plaguicidas, y exigen al Plenario de la Asamblea Legislativa someter a votación el proyecto de ley. Por su parte, los productores afectados por las pérdidas que ocasionó el invierno solicitan al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que los ayuden con insumos, semillas o fertilizantes. Según comentan, se les hace difícil hacer frente a las cosechas futuras si no obtuvieron ganancias en esta última.

Más de 20 mil pescadores artesanales costarricenses, afiliados a la Federación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala de Costa Rica, le solicitan al Gobierno que mantenga en el cargo a Carlos Villalobos Solé, como presidente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA). De acuerdo con representantes de la federación, la renuncia que presentó el mismo Villalobos Solé, se debe a presiones por parte del sector semiindustrial pesquero. Por su parte, cerca de 500 vecinos del cantón de Osa bloquean la carretera Costanera Sur para pedir al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, (MINAET), flexibilizar el control que se aplica sobre los pescadores, piangueros y constructores del cantón de Osa. Los manifestantes se agrupan frente a la entrada de un hotel de la zona, en bahía Ballena, donde se reúnen representantes de las municipalidades de Golfito, Corredores y Osa, así como representantes del MINAET, el Tribunal Ambiental y la Secretaría Técnica Nacional (SETENA). Los funcionarios están en un encuentro para elaborar una propuesta de desarrollo sostenible para la zona sur.

#### **4. Conflictos por el TLC**

El principal conflicto relacionado con el TLC es la circulación por Internet de una propuesta de solicitud de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC). De acuerdo a esta propuesta, planteada por una serie de organizaciones sociales encabezadas por la ANEP, y denominada “Campaña de Renegociación Centroamericana del TLC” (CARECA), Ottón Solís, presidente de la comisión política del PAC, sería el vocero de esta iniciativa.

#### **5. Conflictos vecinales**

Los conflictos vecinales incluyen demandas relacionadas con la gestión de recursos ante desastres naturales, el cierre de canteras, la creación de infraestructura y el manejo de los desechos sólidos.

Sobre esta primera demanda, la Municipalidad y los vecinos del cantón de Siquirres, en la provincia de Limón, anuncian medidas de presión si el gobierno y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no solucionan los problemas causados por las inundaciones de los años 2007 y 2008. Los afectados por las inundaciones presentaron un recurso de amparo contra la CNE, por considerar que no ha realizado los trabajos, ni se ha invertido el dinero necesario para atender las emergencias.

Por su parte, los vecinos del cantón de Zarcero inician las gestiones para solicitar el cierre de la cantera La Montañita. El descontento de los vecinos de Zarcero con las voladuras realizadas por el tajo comenzó hace tres años, tras la caída de una piedra de 7,5 kilogramos que atravesó el techo de una vivienda. Diego Barrantes, coordinador del Comité Patriótico Zarcereño, explica que la manera más viable para conseguir el cierre del tajo es mediante un plebiscito, proceso que solicitarán al municipio en los próximos días.

En cuanto a la construcción de infraestructura, los estudiantes y vecinos de la comunidad de Río Incendio de Laurel, Corredores en Alajuela, solicitan la construcción de un puente sobre el río Incendio. Los estudiantes y los vecinos solicitan a las autoridades respectivas que este problema sea solucionado lo más pronto posible.

Finalmente, y relacionado con el manejo de los desechos sólidos, los habitantes de barrio Fátima de Atenas en Alajuela protagonizan un bloqueo de vías de acceso a la comunidad durante la noche, para impedir que la Municipalidad de este cantón bote la basura en una propiedad ubicada en esa comunidad. Por esa razón colocaron un camión en la vía, 300 metros al oeste de la plaza de barrio Fátima, e impidieron el ingreso de maquinaria con desechos. Además, los vecinos analizan ir al Ministerio de Salud (MINSAL) para solicitar su intervención.

## **6. Conflictos de género**

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) y el Centro de investigación de Estudios de la Mujer de la UCR (CIEM) realizan una marcha para oponerse al voto de la Sala Constitucional que consideró inconstitucional dos artículos de la nueva Ley de Penalización contra la violencia doméstica. La actividad se realiza el día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. También en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el cantón de Escazú realiza una jornada de reflexión denominada. En esta jornada se realiza una marcha que sale frente al gimnasio del Liceo de Escazú y que concluye en el parque central. Una celebración similar se realizó en las calles de Liberia, en la provincia de Guanacaste, en donde vecinos de la localidad se concentran en el parque Mario Cañas para manifestarse en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Durante la actividad hubo presentaciones artísticas, bailes y música. Según cifras de la oficina regional del INAMU, se reportaron cuatro femicidios en Guanacaste en el 2008.

Fuentes: Diarios La Nación y Diario Extra.

Otras fuentes: Semanario Universidad.